

La libertad religiosa en los textos constitucionales latinoamericanos

Dr. Rafael Fernández Domínguez

Uno de los rasgos más acusados en la historia de la humanidad ha sido, sin lugar a dudas, la larga serie de intolerancias y discriminaciones, de diverso tipo que se han producido, tanto políticas, como étnicas, culturales y, desde luego, religiosas. Sin embargo, hasta la II Guerra Mundial, los países del mundo nunca estuvieron en condiciones de acometer, de manera consensual, la magna tarea de aprobar instrumentos jurídicos internacionales, que posibilitaran regular y frenar, al menos, las formas más flagrantes de manifestarse tales arbitrariedades. Esto no quiere decir que fenómenos como esos hayan desaparecido ni mucho menos, pero al menos ya existe un sistema abierto de Declaraciones, Resoluciones, Pactos, Convenios, Protocolos, Convenciones, etc., que recogen un amplio abanico, universal y regional, sobre los derechos humanos y que surgen a partir de la creación de la ONU y de diversas organizaciones regionales. De este modo y ajustándonos exclusivamente al tema que en el presente artículo abordamos, hemos podido consultar un total de 37 documentos de este tipo, los cuales, de una u otra forma, han tenido incidencia en diversas legislaciones nacionales.

Entre esos documentos se incluyen las Declaraciones, -desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948, hasta la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, del 1ro. de septiembre de 1997-, las cuales aunque técnicamente no son convenciones y, por tanto, textos normativos con efecto vinculante para los Estados, ya que no se ratifican por éstos,¹ si tienen un importante valor moral e histórico en la interpretación de la Carta de la ONU y de otros documentos internacionales. También incorporamos a esta selección el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, la Convención sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Convención Americana de Derechos del Hombre y otros, cuyas firmas se iniciaron en la década del 60 y continuado hasta la década del 90 del siglo pasado.

Apreciando la etapa histórica a que nos referimos parece indudable que la perplejidad y el enorme horror que la humanidad experimentó, debido a las monstruosas violaciones de los derechos humanos, cometidas por el régimen nazi-fascista, generó no sólo una enorme conjunción de esfuerzos para darle fin “a como diera lugar”, sino que también permitió que los pueblos y los gobiernos comprendieran la necesidad de hacer algo para evitar que tales excesos pudieran repetirse en el futuro y es que, hasta ese momento, como escribe Thomas Buerghenthal, “No se creía que los seres humanos a nivel individual tuviesen derechos legales, como tales, a nivel internacional, se les consideraba -agrega- como objetos y no como sujetos del derechos internacional...”²

En la práctica, los Estados interpretan las normas de la Declaración Universal y de los Convenios con un sentido obligatorio, pero, al mismo tiempo, rechazan que la comunidad internacional controle su cumplimiento al interior de sus territorios. No obstante, es indudable que tales acuerdos son portadores de una considerable fuerza moral.

Sin embargo, no debemos dejar de apuntar que no concedemos la misma relevancia ética a los Informes Anuales sobre Libertad Religiosa Internacional, que desde 1999 comenzó a publicar el Departamento de Estado de los EE.UU., a tenor con la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA), aprobada por el Congreso de ese país y promulgada por el Presidente Clinton el 27 de octubre de 1998 y en los cuales, a pesar de su declaración de que no intentan “imponer del

criterio estadounidense”, en la práctica se ha convertido en una nueva forma de intromisión en los asuntos internos de los demás países, con el peculiar enfoque selectivo, discriminatorio y parcializado que tiene, en muchas ocasiones, la política exterior de Washington.

La evidencia más elocuente de lo que afirmamos es que los EE.UU. quedan fuera de toda consideración con respecto a posibles violaciones sobre la libertad religiosa de sus ciudadanos. Así, en el informe correspondiente al año 2000, si bien se reconoce que algunas tradiciones religiosas han encontrado resistencia y “sus adeptos ha sido objeto de discriminación e, incluso, persecución”, se agrega que “en la actualidad, en los albores del tercer milenio, las religiones florecen en Estados Unidos y sus tradiciones respectivas enriquecen no sólo a sus propios fieles, sino también la política pública del país” .³

Otro rasgo a apuntar sobre los derechos humanos, recogidos en los diversos acuerdos internacionales sobre el tema es que ellos constituyen lo que un autor denominó “un sistema de garantías interdependiente e interactivo” ⁴, lo que los sitúa, de hecho, en un plano de igualdad jurídica y moral. Por ello, no consideramos que ninguno pueda privilegiarse por encima de los demás ni que, por otro lado, pueda negarse, como en su momento alertó Carlos Marx que “la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen para “hacer historia” en condiciones de poder vivir...”

⁵ Lo anterior evidencia que para poder disfrutar de cualquier otro derecho, los seres humanos deben garantizar, ante todo, el derecho a la vida, como sostiene el Artículo 3 de la Declaración Universal.

Ahora bien, el hombre se diferencia de los animales, entre otras cosas, por el carácter social de su convivencia, por ello precisa de otro conjunto de derechos para alcanzar su realización como tal, derechos en el orden económico, social, político, cultural, etc. He aquí la posición en que nos situamos en el presente artículo, el tema de la Libertad Religiosa, específicamente en el contexto de los

países latinoamericanos, aunque con una previsión que no debemos dejar de apuntar. La investigación en que se sustenta nuestro trabajo se encuentra todavía en una etapa inicial de su desarrollo, por ello nos limitaremos a un breve diagnóstico del tema, tal y como aparece reflejado en los textos constitucionales de los países del área y con una carácter quizás, excesivamente descriptivo, con la aspiración de llegar a estar en condiciones, más adelante, de ofrecer una valoración más integral de su comportamiento.

Es indudable que no basta con que se examine la libertad religiosa a partir de las normativas existentes, sino que, necesariamente, debe llegarse a la constatación práctica de su cumplimiento en la propia realidad social, en correspondencia con el condicionamiento histórico que la caracteriza, en este sentido coincido con el Dr. Jorge Ramírez Calzadilla, cuando escribió que "...la libertad religiosa ...está sujeta a circunstancias concretas que la configuran, la limitan o permiten una manifestación más amplia y que deciden sobre su contenido y carácter..."⁶

Además de lo anterior, la interdependencia que ya hemos señalado entre los distintos derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional obligan a considerar necesariamente parcial el análisis de cualquiera de ellos de forma aislada.

El concepto de Libertad Religiosa que aquí asumimos exige algunas precisiones, teniendo en cuenta dos circunstancias:

En un sentido, no debe interpretarse con el mismo nivel de generalidad que tuvo y tiene la categoría de "libertad de conciencia", la cual, en una acepción general puede entenderse como la libertad del hombre para interpretar la realidad circundante y actuar acorde con sus propias convicciones. Aunque es cierto que en el marco de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, sobre todo de la Gran Revolución Francesa de 1789, con frecuencia se le dió una connotación reducida a la cuestión religiosa, debido a la preeminencia que en la

vida social y en los asuntos estatales tenía la Iglesia Católica del régimen feudal. Algo similar ocurre con el concepto de “libertad de pensamiento” y es probable que por esa razón en el Artículo 18 de la Declaración Universal y en el 18,1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 19 de diciembre de 1966 por las Naciones Unidas), así como en otros convenios internacionales tal libertad aparezca reflejada como “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y cuyo significado se precisa en este último documento con los siguientes términos: “...este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.”

Serie útil agregar que en el comentario general a este Artículo, emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con fecha 20 de julio de 1993, se destaca que “...El Comité señala a la atención de los Estados Partes el hecho de que la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia se protegen de igual modo que la libertad de religión y de creencias...”, así como que: “El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia...”⁷

Por otro lado, durante el llamado proceso de Helsinki sobre la cooperación y la seguridad en Europa el Papa Juan Pablo II dirigió un mensaje a los Jefes de Estado participantes para referirse a su comprensión de este derecho, el cual destacó “En la expresión y en la práctica de la libertad religiosa se observa, en efecto, la presencia de aspectos individuales y comunitarios, privados y públicos, estrechamente ligados entre sí, de suerte que el derecho a la libertad religiosa lleva consigo otras dimensiones complementarias”. Él, concretamente, señala dos planos: el personal y el comunitario, con la comprensión en este último caso, del aspecto institucional de la religión.⁸

Pienso que desde este punto de vista el concepto de Libertad Religiosa objetivamente se amplía, además de forma justificada y reconocida por la comunidad internacional y los distintos Estados, independientemente del grado de observancia que se haga del mismo. Además, la concepción adelantada por el Papa supera la concepción occidental tradicional, según la cual los derechos humanos tienen como pivote al individuo, pues para él abarcan también el entorno colectivo. Al mismo tiempo, esta concepción, probablemente, no se encuentra alejada de la noción, más de una vez formulada por el Presidente cubano Fidel Castro, con respecto a la necesidad de velar no sólo por los derechos del hombre, sino también por los de la humanidad.

Una última observación sería hacer con respecto a la Libertad Religiosa. El hecho de que ésta constituya un derecho reconocido para la persona o la institución de que se trate, no significa la ausencia total de deberes de aquellos que la ejerciten. O sea, desde nuestro punto de vista, sería necesario considerar, en todos los casos, las obligaciones que se derivan de su ejercicio, así, por ejemplo, en la “Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre de 1981, se afirma que esas limitaciones deben ser prescritas por ley y se justifiquen como necesarias “para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.⁹

Apreciando ahora directamente del objeto de nuestra atención, quisiéramos apuntar la circunstancia histórica en que se constituyeron los países de América Latina. Con la excepción de Brasil (colonizado por Portugal), fueron, en su génesis colonias de la monarquía católica española, lo cual, en alguna medida explica la preeminencia de que todavía disfruta esta Iglesia en el subcontinente y que los marca hasta la actualidad. Es de hacer notar que, de manera general, los censos indican, un nivel de catolicismo superior al 90% de la población en casi todos los

países, independientemente de la relatividad de esa conceptualización, pues para esta confesión, como se sabe, el bautismo es sinónimo de catolicidad.

Claro está, a esa característica general sería necesario agregar distintas circunstancias locales, las cuales también imprimen su sello, como trasfondo histórico a la actual situación de los países latinoamericanos, pero su estudio exigiría un espacio mayor del que disponemos en este momento.

Una última apreciación. En la exposición que sigue a continuación excluimos el caso de Cuba, que, pensamos, requeriría un análisis particular, ya iniciado por el colega Ramírez Calzadilla, en la publicación ya citada.

En el resto de los países latinoamericanos¹⁰ y con respecto a las libertades que se conceden a los ciudadanos, lo más común es reconocer la “libertad de conciencia”, la “libertad de religión” y la “libertad de culto”, aunque en algunos casos los enunciados sólo se refieren a este último, como ocurre, por ejemplo en Argentina, Costa Rica y Uruguay. En Panamá la limitación que se impone a la “profesión de todas las religiones” y el “ejercicio de todos los cultos” es tanto “el respeto a la moral cristiana”, como al “orden público”. A ello se agrega que son escasos los países que reconocen, de forma explícita, el derecho a no profesar creencia religiosa alguna. Esto se aprecia en las constituciones de Colombia, México, Nicaragua¹¹ y Chile, aunque en este último caso el enunciado correspondiente aparece en la Ley de Cultos del país, Artículo 6/a, aprobada en 1998.¹² En Paraguay se consagra, además, la “libertad ideológica”.

Lo que acabamos de exponer está en estrecha relación con el reconocimiento o no del laicismo estatal. Son pocos los países que en sus constituciones reconocen el carácter laico del Estado, estos son los casos de Brasil, México, Nicaragua, Uruguay y Colombia. En este último país, sin embargo, el enunciado aparece en la Ley No. 133, del 23 de mayo de 1994 “Del Derecho de Libertad Religiosa”, junto

Comentado [J1]:

Comentado [J2]:

a la observación de que “el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”.¹³

Por otra parte existen varios países cuyas constituciones reconocen el carácter confesional de los Estados respectivos y, por tanto, declaran a la “religión católica” como oficial (Bolivia -Art. 3- y Costa Rica -Art. 75-), mientras en la Constitución de Argentina, Art. 2, se afirma que “Gobierno Federal sostiene el culto católico, apostólico, romano”. En la Constitución de Panamá (Art. 35), se dice que “la religión católica es la de la mayoría de los panameños” y en la de Paraguay (Art. 82), se reconoce “el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la Nación”, al mismo tiempo que se afirma (Art. 24) que “Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía”, agregando que “Se garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas”. Es de señalar que en el Perú, hasta 1993, el catolicismo también tenía un reconocimiento oficial, mientras en la Constitución actual, aprobada en ese año, se recoge en su Artículo 50, que “el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral” del país, aunque “dentro de un régimen de independencia y autonomía”, mientras en Colombia el Concordato de 1974, firmado por el Estado con la Iglesia Católica, favoreció a la misma hasta la promulgación de una nueva Constitución en 1991.

Al cuadro que acabamos de presentar sería útil agregar algunos elementos adicionales, pues consideramos que aportarían elementos para formarse un juicio más integral sobre el estado en que se contempla la libertad religiosa en los distintos países latinoamericanos. Como botón de muestra, para comenzar, tomaremos los ejemplos de Argentina y Bolivia, considerando la posibilidad que se nos brinda de disponer de documentos complementarios sobre esos países.

En el caso del primer país al que hacemos referencia debe recordarse que la Constitución de la República Argentina actualmente vigente fue aprobada en una fecha tan lejana como 1853.

Con anterioridad a ella, el país, una vez que alcanzó su independencia, había adoptado otras dos constituciones, en 1819 y 1826. A su vez, en 1949 se aprobó una nueva Constitución, que fue anulada en 1956. Una vez que se produce el golpe militar de 1966, fueron suspendidas las garantías constitucionales y cuando se produce el nuevo golpe militar, en 1976, volvió a abolirse la Constitución de 1853, la cual, finalmente, fue reinstaurada en 1983, al cerrarse el capítulo de los gobiernos militares.

Esta Constitución de 1853, promulgada el 25 de mayo de ese año, ha experimentado distintas reformas a lo largo de su accidentada existencia, la última de las cuales data de 1994, según la cual dejó de ser una exigencia para acceder a la Presidencia y Vice-Presidencia del país profesar el catolicismo. Se ha afirmado que en ella influyeron, como antecedentes, la Constitución de Estados Unidos y las doctrinas de la Revolución Francesa. Sin embargo, al concebir el Artículo 2, al que ya hicimos referencia, los legisladores, evidentemente, no tomaron en cuenta la Constitución estadounidense, cuya primera Enmienda reprueba el reconocimiento de cualquier religión, con independencia de la forma en que allí se aplica el laicismo estatal.

Hay que subrayar que a Argentina le queda la atadura de lo que ha sido una constante en distintos países de Latinoamérica, la firma de Concordatos con la Santa Sede, los cuales han contemplado la concesión de determinados privilegios, no al Estado Vaticano, sino a la Iglesia Católica. En el caso de Argentina tal acuerdo data del 23 de noviembre de 1966, durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía y fue puesta en vigor por la Ley 17.032.

A tenor con las obligaciones contraídas por ese acuerdo la República Argentina a asumido diversos compromisos que sitúan a la Iglesia Católica en una posición de indudable privilegio, con respecto a otras confesiones religiosas en el país. Ahora bien, en el interés de no hacer demasiado extenso este análisis, procuraremos enumerar los aspectos principales sin excesivos comentarios al respecto.

Según el artículo 3ro. de esa Ley “los arzobispos, obispos residenciales y los coadjutores con derecho a sucesión serán ciudadanos argentinos, pero según el Artículo 5to. “el Gobierno Argentino...facilitará al personal eclesiástico y religioso extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía”, probablemente apoyándose en el Art. 20 de la Constitución, el cual recoge el derecho “de la autoridad” de acortar el plazo exigido de dos años residiendo en el territorio nacional para disfrutar de ese derecho, alegando “servicios a la República”.

La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas del país también corre a cargo de la Iglesia Católica, para lo cual fue promulgado el Decreto-Ley No 7623, del 5 de julio de 1957, modificado a través de un intercambio de notas entre el Gobierno Argentino y la Santa Sede, con fecha 21 de abril de 1992 y según el cual se creó en el país un Obispado Castrense, equiparado a Diócesis, el cual incluye el Obispo Castrense, un Obispo Auxiliar, tres Capellanes Mayores para las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, así como los Capellanes correspondientes.

Con fecha 10 de febrero de 1978 fue promulgada la Ley No. 21.745, según la cual se creó el Registro Nacional de Cultos, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y cuyo Reglamento fue promulgado por el Decreto 2037 del 4 de octubre de 1979. En ese Registro deben inscribirse todas las organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción nacional, excepto la Iglesia Católica, la cual no está obligada a hacerlo.

Por otro lado, con fecha 25 de febrero de 1977, fue promulgada la Ley 21.540, contentiva de Normas para el Sosténimiento del Culto Católico y que establece

asignaciones para los Arzobispos, Obispos, Obispos Auxiliares (incluyendo a los que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas) una vez que cesen en sus cargos por razones de edad o invalidez. También se encuentran vigentes las Leyes 21.950, del 7 de marzo de 1979 y 22.162, del 18 de febrero de 1980, según la cual se adjudica una asignación mensual a las mismas categorías antes mencionadas y a los curas párrocos o Vicarios Económicos de Parroquias situadas en Zonas de Frontera, respectivamente.

También existe en Argentina la Ley 22.430, de fecha 16 de marzo de 1981, la cual recoge una asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculares católicos y la Ley 22.950, de fecha 14 de octubre de 1983, que contempla una asignación mensual por cada uno de los alumnos de distintos seminarios que se forman como Sacerdotes Diocesanos.

Con respecto a otras denominaciones religiosas que existen en ese país la República Argentina tiene aprobadas dos Leyes, la 24.571 de fecha 27 de septiembre de 1995 y la 24.757, del 20 de diciembre de 1996, las cuales contemplan como días no laborables para la practicantes del judaísmo el Año Nuevo Judío (dos días) y el Día del Perdón (un día) y para los musulmanes el Año Nuevo Musulmán, el día posterior a la culminación del ayuno y el Día de la Fiesta del Sacrificio. Complementadas por la Ley 25.151, del 14 de septiembre de 1999, la cual recoge el derecho para las trabajadoras que tienen esas creencias y que no laboren los días señalados de recibir la remuneración correspondiente a los mismos.¹⁴

Es de señalar, asimismo, que muchas sectas y confesiones están prohibidas en Argentina, por la consideración de que "son lesivas al orden público"¹⁵

Con respecto a Bolivia, otro de los países que tienen firmado un Concordato con la Santa Sede, sólo quisiéramos señalar que en ese país se encuentra aprobada la así denominada Resolución Suprema 219172, de fecha 21 de julio del 2000,

mediante el cual se puso en vigor el Reglamento de Culto de ese país, el cual contempla el funcionamiento de la Dirección General de Culto, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto y la cual es la encargada de regular, supervisar y coordinar “las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y otras asociaciones religiosas legalmente establecidas en el país”.

Sin extendernos en demasía, sólo quisiéramos apuntar breves comentarios sobre el funcionamiento ese organismo del Estado Boliviano. Mientras sus funciones con relación a la Iglesia Católica se reducen a “asesorar a las autoridades del Ministerio”, “llevar un registro de las entidades católicas en el país”, “recibir y estudiar documentos” relativos al reconocimiento de personalidad jurídica para entidades católicas, “coordinar con las autoridades eclesiásticas el desarrollo de ceremonias públicas”, etc., con respecto a otras “asociaciones religiosas legalmente establecidas en el país” se subrayan las siguientes funciones: “cooperar y supervisar” las labores de tales asociaciones, además de las demás señaladas. Se aprecia que con respecto a la Iglesia Católica no existe el derecho de supervisión.

Por otro lado, cuando se norman los trámites previos para el reconocimiento de personalidad jurídica a las asociaciones religiosas en el país también se hace una distinción. En el caso de las asociaciones católicas sólo se exigen los siguientes documentos: Estatutos, solicitud formal, certificado expedido por el Obispo de la Diócesis respectiva y un disquete con los estatutos, reglamentos y doctrina. En el caso del resto de las asociaciones religiosas, además de los documentos ya señalados se exigen también: nómina de personeros responsables, con número de cédula de identidad, pasaporte, firmas y certificados de antecedentes personales y judiciales, fotografías actuales y los extranjeros deben adjuntar, además el certificado de INTERPOL u otro análogo y fotostáticas de las hojas visadas de su pasaporte. En caso de poseer inmueble propio deben también “presentar plano o croquis del inmueble a inspeccionarse” e “inspección ocular de esa sede o instalaciones”.¹⁶

Después del examen que hemos realizado pensamos que no es necesario ser muy suspicaz para comprender que con normativas como esas es muy difícil que pueda darse cumplimiento al punto 9 de del Comentario General del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya mencionado, el cual reza: “El hecho de que una religión se reconozca como religión del Estado o de que se establezca como religión oficial o tradicional, o de que sus adeptos representen la mayoría de la población no tendrá como consecuencia ningún menoscabo del disfrute de cualquiera de los derechos consignados en el Pacto, comprendidos los artículos 18 y 27, ni ninguna discriminación contra los adeptos de otras religiones o los no creyentes...”

No obstante, existen valoraciones que se han ocupado directamente de la crítica del al estado de cumplimiento de la Libertad Religiosa en América Latina. Uno de ellos aparece en el trabajo titulado “La Libertad Religiosa y el Pacto de Punto Fijo o la restricción de la libertad de cultos en Venezuela”, firmada por Williams Pitter, el cual se define a sí mismo como cristiano evangélico venezolano y que se manifiesta como admirador de la Constitución de Estados Unidos, al considerar como “notable” la contribución de la misma “en materia religiosa” y por cierto, crítico de los países socialistas en este sentido.

Este autor realiza una muy negativa valoración de la ya derogada Constitución Venezolana de 1961 y de sus “herederos ideológicos”, los cuales no solo “se repartieron el poder sino también ...llevaron al país a la peor crisis socioeconómica y moral de nuestra democracia...! Entre los argumentos que emplea podemos señalar los siguientes:

La sujeción del culto no católico a la “suprema inspección del Estado”, derecho que asumía la Oficina de Justicia y Culto, dependiente del Ministerio de Justicia, la

cual, según su denuncia había estado dirigida “directa o indirectamente por sacerdotes católicos”.

El único reconocimiento jurídico que se otorgaba en el país, en materia de cultos, era la de atribuir personería las iglesias de cualquier credo y de permitirles que pudieran constituirse como personas jurídicas, pero en términos de “asociaciones civiles sin fines de lucro”, pero no reconocidas como iglesias por el Estado venezolano.

Otro argumento que emplea es el contenido del ya desaparecido Artículo 130 de aquella Constitución, el cual señalaba: “En posesión como está la República del Derecho de Patronato Eclesiástico, lo ejercerá conforme lo determine la Ley. Sin embargo, podrán celebrarse convenios o tratados para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado”. Y acotaba: “por supuesto, la palabra “Iglesia”, aquí es naturalmente la Iglesia Católica”. Las consecuencias que se derivaron fueron plasmadas en el Convenio firmado por el Estado Venezolano y la Santa Sede el 16 de marzo de 1964, el cual contemplaba la figura de “asignaciones eclesiásticas” al clero católico.¹⁷

No son estos los únicos argumentos que emplea el autor para valorar el estado en que se desenvolvía la Libertad Religiosa en Venezuela, pero con lo ya señalado pienso que se puede tener una idea del significado que pueden tener en América Latina reglamentaciones como las existentes, incluso cuando no han sido firmados acuerdos con la Santa Sede por distintos países.

En el otro extremo del espectro que hemos examinado se encuentra el caso de México, país que consideramos como el que con más consecuencia ha dado cumplimiento, al menos en sus instrumentos legislativos, al principio del laicismo estatal y a la separación de la Iglesia del Estado, caracterizándose además, por una larga de tradición anticlerical, al extremo que no fue hasta julio de 1992 que se

modificó la Constitución para permitir el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y, con ello, su acceso a la educación.

La primera cuestión que llama la atención en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, promulgada simultáneamente con la modificación constitucional ya señalada, lo constituye el carácter laico de su reconocimiento, en el Artículo 6to., de la personalidad jurídica de las “Iglesias y agrupaciones religiosas”, sin que aparezca por parte alguna una consideración especial a la Iglesia Católica, como ocurre en otros países del área.

En segundo lugar (Artículo 11) sólo se concede la calidad de representantes de las asociaciones religiosas a ciudadanos mexicanos mayores de edad.

En tercer lugar y también sin privilegios de ningún tipo, el Artículo 21 establece que “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Solamente podrán realizarse extraordinariamente fuera de ellos” y de acuerdo a lo reglamentado, así como que sólo podrán difundirse actos de culto a través de los medios masivos de comunicación no impresos, únicamente con la autorización de la Secretaría de Gobernación.¹⁸

Resulta igualmente original el concepto mexicano, contenido en el Artículo 130 de su Constitución, de que en el territorio nacional está prohibida la formación “de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa y la prohibición de que “los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan” puedan heredar por testamento “de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado”.

De todas formas no parece ser este un buen momento para la aplicación de este Artículo, por parte del Gobierno Federal y de otras instancias gubernamentales

que responden al Presidente Fox, pues desde su campaña presidencial lo ha enjuiciado negativamente. El 13 de enero del 2000, en una reunión con líderes sociales del Estado de Tamaulipas propuso una nueva reglamentación a la ley de cultos encaminada a dar “una mayor libertad a las iglesias en el país y las libere del excesivo control que impone el estado sobre estas instituciones”, aunque excluyó que a los ministros se les permitiera hacer proselitismo en el púlpito o se les otorgase el derecho a ser votados.¹⁹ No obstante, durante su campaña presidencial actuó una Coordinación de Asuntos Religiosos, la cual hizo llamados enfáticos para atraerse el voto de los cristianos, enjuiciando a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional de arrastrar una “bancarrotas moral” y por practicar el chantaje y la manipulación de los sectores cristianos.²⁰

Más tarde, el 27 de abril del 2000, el Presidente Fox insistió en el tema al dirigir una carta a los Obispos Mexicanos en la que hizo mención a su “Proyecto para la Nación” sobre Libertad Religiosa y Relaciones Iglesia-Estado, además de subrayar algunos temas, tales como el derecho a la vida, el fortalecimiento de la unidad familiar, el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, el acceso de las Iglesias a los medios masivos de comunicación, etc., se comprometió a promover “que se eliminen las contradicciones entre los artículos 24 y 130 de la Constitución, reformando el 130 en la parte que restringe la libertad religiosa; que proclama el artículo 24”.²¹

Quisiéramos concluir señalando que si bien en la actualidad el derecho a la Libertad Religiosa se encuentra recogido en numerosos documentos normativos, tanto internacionales, como nacionales, probablemente imperfectos en muchos casos, pero existentes y vigentes, pensamos que los mayores peligros que se le oponen provienen de otro lado. Monseñor Diaurmid Martín, alto representante de la Iglesia Católica, que visitó nuestro país en 1997, lo dijo de manera muy clara cuando expresó que la Libertad Religiosa “no es cosa adquirida en el mundo de hoy”, sobre todo como “una consecuencia ulterior de la una filosofía individualista que tiende a reducir la importancia de la dimensión social de la persona y todo lo

que esta dimensión conlleva” -y agregó- “Por ejemplo, se manifiesta en formas de economía de extremo liberalismo, en ataques al valor de la familia, en la reducción de los compromisos por la solidaridad, sea a nivel local o en la comunidad, sea también a nivel internacional, es decir, la solidaridad entre las naciones y los pueblos...”²²

¹ Ver: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Cuba”, San José, 2001, pag. XIII

² Buergenthal, Thomas, “Derechos Humanos Internacionales”; México, D.F.; Edit. Gernika, 1996, pag. 31-32. Ver también: pag. 51

³ Departamento de Estado, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Informe Anual sobre Libertad Religiosa Internacional, 5 de septiembre del 2000.

⁴ Donnelly, Jack, “Derechos Humanos Universales”; México, D.F.; Ed. Gernika, 1994, pag. 45

⁵ Marx, Carlos y Engels, Federico, “La Ideología Alemana”; en: Selección de Textos, La Habana, 1973, T-2, pag. 194.

⁶ Ramírez Calzadilla, Jorge, La religión y los derechos humanos en Cuba; Revista “Contracorriente”, Año 2, No. 6, pag. 46

⁷ Ibidem

⁸ Citado por Martín, Mons. Diaurmid, “La libertad religiosa como fundamento de los derechos de la persona humana. <http://www2.glauco.it/nacub/indsesoc.htm>

⁹ http://www.mju.es/asuntosreligiosos/ar_decl.htm - 0

¹⁰ Aquí incluimos a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y México (de los cuales además de las constituciones respectivas, hemos obtenido parte de la legislación complementaria), así como de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

¹¹ http://www.mju.es/asuntosreligiosos/ar_onu.htm. En lo adelante todas las referencias a las Constituciones latinoamericanas son tomadas de esta fuente.

¹² http://www.mju.es/asuntosreligiosos/ar_iberamerica.htm - 0

¹³ http://www.mju.es/asuntosreligiosos/ar_ib4.htm - 0

¹⁴ http://www.mju.es/asuntosreligiosos/ar_iberamerica.htm - 0

¹⁵ Microsoft. Enciclopedia “En Carta”, 1999.

¹⁶ http://www.mju.es/asuntosreligiosos/ar_ib2.htm - 0

¹⁷ http://members.nbci.com/pwarning/libertad_religiosa.htm

¹⁸ Secretaría de Gobernación. Sub.Secretaría de Asuntos Religiosos. Dirección General de Asuntos Religiosos, México, D.F, 1998

¹⁹ <http://www.vicentefox.org.mx/noticias/index.html>

²⁰ http://www.vicentefox.org.mx/campana/carta_semanal/index.html

²¹ <http://www.vidahumana.org/temas/mexico-provida.html>

²² <http://www2.glauco.it/nacub/indsesoc.htm>